Insurrección

Revista semanal del Comando Central
Edición N.641 del 9 de julio de 2018

PAZ SI

GENOCIDIO NO

SUMARIO

Insurrección
Revista Semanal del Comando Central del ELN
Edición N.641 - Julio/9/2018



PAZ SI, GENOCIDIO NO

En el último mes se han registrado 33 asesinatos de líderes sociales en el país, en sólo el 2018 van más de 130, mientras siguen circulando en todo el territorio nacional y va tomando fuerza el miedo causado por las amenazas de los paramilitares. Una ofensiva terrorista parecida a esta, ya la vivimos hace 16 años al terminar el gobierno de Pastrana y al inicio del de Uribe, **orientada al control de las luchas sociales y a justificar una manera de gobernar**, fundada en la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.

Los anuncios del presidente electo muestran que viene a **profundizar la crisis del proceso de paz**; por medios de desarticular el acuerdo firmado con las FARC-EP, y condicionar el proceso con el Ejército de Liberación Nacional, con la excusa de no reconocer la existencia del conflicto armado y negar nuestro carácter de insurgentes.

Hoy en el país se atisban señales de esperanza, a pesar de los difíciles e inciertos que resulten estos

escenarios políticos; porque **crece un proceso político y social de articulación de las mayorías que quieren y creen en la vida**, quienes a gritos dicen no a la muerte, no a la guerra, no a la violencia política y si a los cambios y transformaciones que el país necesita, para salir de esta encrucijada.

Nos mueve profundamente la esperanza y la lucha permanente por otro mundo posible, en los territorios, donde se construyen expresiones de buen vivir, a través de sus planes de vida, de etno-desarrollo, dando cuenta de nuevos relacionamientos con la naturaleza y con sus congéneres en procesos comunitarios solidarios y autónomos. Donde se luchan los cambios con la movilización, con la organización social. Este es el camino a la utopía, **la urgente necesidad y anhelo de las mayorías de Colombia por tener un país distinto**, algo que nos llama al encuentro, al gran dialogo nacional y por ello el sentido y el significado de la participación en esta Agenda de conversaciones que adelantamos con el Gobierno.



El camino hoy está en la resistencia por la paz y contra la violencia, **será la movilización ciudadana y la unidad de los colombianos la que nos garantice la esperanza de un país distinto**, un país en paz con justicia social y equidad.

Esperamos que el Gobierno recién electo, actúe con cabeza propia y se decida a escuchar el clamor de la sociedad que no quiere una guerra perpetua, que no quiere más líderes sociales asesinados, y que cambie la forma como el régimen ha sofocado los conflictos sociales. El presidente electo debe tomar las decisiones que correspondan para detener este desangre de colombianos.

La esperanza también está en el entusiasmo, en las búsquedas, en la inmensa movilización social por la vida que se avecina, en las luchas venideras... La Velatón de este viernes 6 es la mejor demostración de sensibilidad y solidaridad, con quienes pese a las amenazas persisten en la defensa de la vida y el territorio.

Hacemos nuestra la experiencia mexicana de Bety Cariño, recogida en su libro Hilando fino con el feminismo comunitario de Julieta Paredes:

"Y si creen que con eso nos van a espantar, les queremos decir que nos ponen más fuertes, que nos dan más ánimo, porque en la medida que ellos apuestan por la muerte, nosotros seguimos apostando por la vida".

QUE DUQUE NO ME SALGA CABALLO





"DEMANDAMOS DE LA NUEVA PRESIDENCIA COLOMBIANA UN COMPROMISO INEQUÍVOCO CON LA PAZ"

Las organizaciones y plataformas abajo firmantes, reunidas en Madrid, con la voluntad de poner en marcha fórmulas de coordinación que nos hagan ganar eficacia en el trabajo de solidaridad, acompañamiento y defensa de los derechos humanos en Colombia:

Nos pronunciamos en favor del **cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos por el gobierno colombiano y las FARC** para poner fin al conflicto armado con esta insurgencia y manifestamos nuestra intención de hacer seguimiento a este proceso. Mostramos, en este sentido, nuestra preocupación por el reiterado incumplimiento en la implementación de los Acuerdos por parte del gobierno colombiano.

Hacemos un llamado a la tramitación de la Ley que permita la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, tal y como fue aprobada en el acuerdo de La Habana.

Apoyamos los diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano que se adelantan en La Habana,

instamos a las partes a pactar un cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades que genere un ambiente favorable para la negociación política.

Denunciamos el **asesinato sistemático e impune de centenares de líderes y lideresas sociales**, cometidos en su mayoría por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado. Los ataques a líderes y lideresas están directamente relacionados con los intereses económicos y políticos de las clases dirigentes, del narcotráfico y de las multinacionales extranjeras, muchas de ellas españolas.

Exigimos por tanto al gobierno colombiano que proteja el derecho a la vida de quienes ejercen la oposición política y el liderazgo social, y garantice el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos.

Igualmente, exigimos la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes, en cumplimiento de los estándares internacionales respecto a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Denunciamos las **graves consecuencias sociales y medioambientales del accionar de las multinacionales minero-energéticas y agroindustriales en Colombia**, especialmente en los territorios de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Compartimos la solidaridad y el acompañamiento a estas comunidades en la defensa de la vida y de sus territorios, con un enfoque diferencial y territorial.

Reconocemos la oportunidad de interlocución con el nuevo gobierno español para que se comprometa con un cambio radical en su política exterior respecto a Colombia. En los últimos años, el gobierno español ha sido acrítico con el gobierno colombiano, mostrando abierto desinterés respecto a las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Colombia, y ha mantenido una actitud de desidia respecto a las negociaciones de paz y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. **Reclamamos del gobierno español un compromiso abierto a favor del diálogo, la justicia y la paz en Colombia**, así como la defensa constante de estos principios rectores en la política de la Unión Europea con Colombia.

En el mismo sentido, demandamos de la nueva Presidencia colombiana un compromiso inequívoco con la Paz, que debe pasar por el desmantelamiento urgente de los grupos paramilitares, las garantías para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de los Derechos Humanos y nuevas políticas dirigidas a favorecer a las grandes mayorías del país.

Así suscribimos, a los 28 días de junio de 2018.

Encuentro estatal por la solidaridad y la paz en Colombia.

Coordinació Valenciana de Solidaritat amb Colòmbia (CEAR - PV, CEDSALA, Colectivo Sur- Cacarica, Entreiguales Valencia, Intersindical valenciana y Fundación Mundubat).

Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

Colectivo de Refugio Luciano Romero Molina y Soldepaz- Pachakuti (Plataforma Asturiana por la Solidaridad Internacionalista y los Derechos Humanos)

Asamblea Moza d'Asturies, colectivo juvenil asturiano (Comité de apoyo al programa asturiano de derechos humanos en Colombia).

Asociación de Solidaridad con Colombia Katío (Asoc- Katíos)

Mesa Poética por la Paz.

Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas.

Comisión Ética - Madrid.

Plataforma Andaluza por la Paz de Colombia.

Confederación Sindical de CC.OO

Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero.

Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia.



LLAMAMIENTO POR LA ARTICULACIÓN Y LA ESPERANZA

El momento histórico nos indica la **urgencia de avanzar en la articulación necesaria de los distintos sujetos políticos y sociales, rurales y urbanos**, con un sentido plural que nos acerque a la configuración del sujeto político histórico, para avanzar hacia las transformaciones inaplazables que requiere el país.

Con este propósito constatamos de entrada la obligación ético-política de aunar, fortalecer y empoderar comunidades, cuyo pensamiento y conocimiento evoquen con hondura sus históricos sueños de una nación abierta y plural, diversa, equitativa y sostenible. Comunidades de palabra liberada dispuestas a romper los regímenes de la palabra popular encadenada y prohibida. Comunidades de prácticas organizacionales y políticas nuevas derivadas de todas las luchas sociales y de todas las movilizaciones populares. **Comunidades que mediante procesos organizados conocen el multilenguaje y la multiculturalidad**, expresada no sólo en la diversidad de idiomas, sino en la riqueza de los dialectos



y costumbres de cada una de las regiones, hermanadas con todas las formas de la vida, con los saberes y pensamientos ancestrales. Comunidades del plural y colorido ser, existir, pensar, sentir y amar de la población humana, que habita el suelo común de Colombia.

Reconocemos la **urgencia de inaugurar escenarios de articulación en nuestro país desarticulado**, de incidir constructivamente en el conflicto nacional sin resolver por más de dos siglos, de romper las trampas del aislamiento y los individualismos, del lucro y el consumismo, que nos asfixian en parcelas, intereses, claustros y distancias; de pensarnos en la construcción de entendimientos y acuerdos, de eliminar los cercos de la incomunicación, de optar por liberadoras formas de pensar, sentir, decir, hacer, conversar e intercambiar los sueños y las utopías.

Con estos propósitos nos hemos venido trenzando en conversación y en compartir de sueños, en dudas y preguntas, en réplicas y contrarréplicas, en múltiples encuentros, escenarios, fechas y horarios; procesos de formación y de lucha social y política, propuestas divergentes de indígenas, negros, campesinos, víctimas, mujeres, estudiantes, dirigentes sociales, educadoras-educadores populares, maestras y maestros universitarios y los presos políticos del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres que durante más de 7 años hemos insistido en esa nueva pedagogía, que recupere al sujeto transformador y promueva el saber-experiencia y el conocimiento desde los territorios, que aborde comprometidamente los problemas de la vida de las comunidades y los pueblos y que promueva una formación permanente y contextualizada, potenciando con su participación el nacimiento de una nueva sociedad y una nueva democracia.

En Colombia, pese a varios intentos fallidos en su contra, las estructuras coloniales se mantienen. **La crisis económica, social y política se ha profundizado en las tres últimas décadas**, como resultado de las formas de acumulación, de las condiciones de desigualdad, que generan exclusión y marginalidad, de la perversa conducción del Estado y de un largo conflicto con altos niveles de degradación de la confrontación armada, en el que las más afectadas son las poblaciones que habitan en los territorios, afrocolombianos, indígenas, campesinas y desplazadas internas.

El Estado, a través de todos sus gobiernos ha sido enfático, con todo, en imponer a las negociaciones de paz unos "inamovibles", a saber, el modelo económico, el modelo político y la doctrina militar, asuntos que, en últimas, son los grandes generadores del conflicto colombiano, que traspasa los dos últimos siglos. Así, mientras las negociaciones y acuerdos con la insurgencia supuestamente avanzan, **la realidad política, social, económica y de guerra del país no dan señales de cambios favorables** a la vida y a la democracia.

Son relevantes, en cambio, hechos que evidencian que el conflicto armado no tiene fin cercano: **las élites dominantes se fortalecen y controlan el país**; los medios de comunicación, las iglesias fundamentalistas, los aparatos armados y la educación controlan los cuerpos y el pensamiento; el sistema financiero tiene licencia para la más abusiva voracidad; según el Indicador GINI, (forma de medir la distribución de la riqueza) crece sin pudor la concentración de las riquezas en poquísimas manos, al tiempo que generan exclusión, marginalidad y empobrecimiento masivos en la mayoría de la población; la delincuencia común y el paramilitarismo crecen sin pausa y hacen control político, económico y social en las regiones; grandes multinacionales extractivistas hunden sus voraces garras y dientes para saquear



el suelo y el subsuelo, amparadas por las políticas estatales que lesionan los intereses y la vida de la gran mayoría.

En los territorios urbanos y rurales **no hay coherencia entre la realidad que afrontan los empobrecidos que los habitan y la sistemática negación del conflicto** que pregona el gobierno nacional. La naturalización de la corrupción en el ejercicio del poder, la sub-cultura mafiosa que sonsaca a los jóvenes de los escenarios de la educación, la eliminación sistemática de animadoras y dirigentes políticos populares, los continuos desplazamiento forzados campo-ciudad, las personas que mueren por hambre, la mercantilización del sistema de salud, los altos índices de desempleo, subempleo y empleo informal, la violencia intrafamiliar, la discriminación por diversidad sexual y de género, etnia, clase social o credos religiosos

y políticos, la estigmatización y persecución a los movimientos sociales y la vulneración de los derechos constitucionales y humanos contradicen los escenarios, que dice estar tejiendo el Gobierno con la insurgencia armada hacia la solución del conflicto.

Las negociaciones del Estado y las guerrillas de las FARC-EP y el ELN tienen que tomar en consideración el fracaso mundial del modelo capitalista, los esfuerzos de la humanidad por construir democracias plurales e incluyentes y la innegable obligación de transformar las causas que originan los conflictos y los conflictos armados locales y mundiales. Por lo tanto, para que este ejercicio sea consistente, duradero y eficiente, ha de contar con la **máxima participación dinamizadora de los movimientos populares y territoriales y las organizaciones sociales de base**, que asuman la tarea de construir los fundamentos y condiciones de los procesos de negociación y acuerdo.

En consecuencia, lo harán desde las perspectivas de satisfacción de necesidades, de reconocimiento político de las luchas populares, que posibilite condiciones de gobernabilidad e integración de los pueblos y de la dignificación de la vida en todas sus manifestaciones. En la búsqueda de este propósito **las organizaciones populares se articularán como comunidades de pensamiento, de saberes y de prácticas** y de nueva educación y se manifestarán como fuerzas indispensables, para lograr los cambios que requieren el Estado y la sociedad.

En conclusión, **ningún proceso de paz o de resolución del conflicto por vías no violentas será posible sin la participación activa y decidida de todas las comunidades**, con asiento en los diferentes territorios urbanos y rurales de la geografía nacional. En tal sentido, el ejercicio político no debe seguir siendo entendido únicamente, como la pertenencia a un partido o movimiento con objetivos puramente electorales, sino que la política debe ser el mecanismo con el cual se busca el bienestar social de una comunidad en concreto.

Para la participación, tanto en el proceso de diálogos entre el gobierno y el ELN, como en toda la dinámica política del país, no sólo no hay que pedir permiso, sino que hay **que exigir que se respeten los escenarios y los mecanismos que las comunidades acuerden y diseñen** para tal fin. La soberanía popular no se delega, se ejerce a pesar de la negativa de las élites para reconocerla. Y ante tal negativa la respuesta debe ser de indignación y rebeldía popular. Es momento de volver a la acción sin permiso.

Con profundo sentimiento de respeto y amor hacia los receptores de ese mensaje,

Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo.

Félix Silva



EL INCUMPLIMIENTO Y LA NECROPOLÍTICA COMO MÉTODO

Hay métodos que parecen inalterables –inmarcesibles- en Colombia. Es decir, se anuncia que todo cambia –la política, la sociedad, el gobierno-, para garantizar que nada cambie. Y las élites saben que hay dos estrategias que le han servido durante décadas: pactar para incumplir y perseguir, hostigar y matar para atemorizar en una escalada que los expertos denominan como "necropolítica".

El método se sostiene esté quien esté en la Presidencia del Gobierno, sin importar si va acompañado de discursos rudos y violentos, como los de Álvaro Uribe y los suyos, o suenan a conciliación y paz, como los que ha repetido Juan Manuel Santos en contra de las prácticas del propio Estado.

No cumplir para desalentar

En los últimos días se ha conocido un nuevo balance internacional de la implementación de los acuerdos firmados entre el Gobierno y las FARC. Esta vez ha sido la Organización de Estados



Iberoamericanos (OIE), que ha medido los avances en lo que tiene que ver con la desmovilización y la incorporación a la vida política, pero señala la precariedad de todo lo que tiene que ver con la reforma rural integral, la reincorporación económica de los desmovilizados y las medidas adicionales que contempla el acuerdo para reparar a las víctimas. De hecho, en materia de reforma rural no se ha implementado ni el 5 por ciento de lo pactado y en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos, hay avance en aspectos formales, pero hay un cero total en asistencia en salud, proyectos productivos, entrega de subsidios de transporte y alimentación, atención integral y demás factores a poblaciones con tales cultivos.

El director del Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, aseguraba en una entrevista el pasado jueves que "las FARC han honrado su palabra de trabajar en la sustitución de la coca". El funcionario oficial reconoce que el Estado no ha sido tan 'juicioso' y atribuye ese hecho a que la puesta en marcha de proyectos productivos es "algo muy complejo". También señala que el incremento de los cultivos para uso ilícito no es atribuible ni a las FARC ni al ELN, sino "al Cartel de Sinaloa y el Clan del Golfo".

En el balance del cierre del actual Congreso, Imelda Daza, de Voces para la Paz, era así de contundente: "De los cinco puntos de los acuerdos de paz no se ha implementado nada. Eran cerca de 24 proyectos de

ley que se debieron aprobar con el fast track, pero no se cumplió. Todo coincidió también con un año electoral, pero creemos que el primer pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre los derechos del Congreso sobre este tipo de leyes frenó todo, porque a partir de ahí partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, se dedicaron a no aprobar nada y a colgarle a cada artículo de a 10 o 15 propuestas".

Esa ha sido la norma… el Estado –que en Colombia es casi sinónimo de 'establecimiento'- lleva incumpliendo décadas. Pacta y firma acuerdos con campesinos, gremios, indígenas, guerrillas… pero sabe cuando estampa su firma que va a incumplir. Si la Minga Indígena cuantificó en 1.300 los acuerdos firmados con los pueblos indígenas por el Gobierno para luego incumplirlos, el acuerdo final con las FARC ha sido modificado, incumplido e ignorado. El método no sería efectivo si no estuviera apoyado en una estrategia del miedo que tiene muchas aristas.

La necropolítica como única política

La necropolítica, término acuñado por el camerunés Achille Mbembe, es cuando la violencia y la muerte se convierten en el principal instrumento de dominación política, cuando el hostigamiento, la tortura y el exterminio se utilizan para el control de grupos, colectivos y minorías sociales, políticas o étnicas. No hay improvisación cuando de necropolítica se trata y en esa lógica del poder confluyen las élites tradicionales, los grupos paramilitares y los cárteles de la droga. Es un poder aparentemente difuso pero en la ecuación de la necropolítica está claro quienes son sus componentes.

Y el método puede ser más o menos agresivo en función del clima de tolerancia o de impunidad que sienten sus actores. Desde el 1 de junio al 4 de julio son ya 33 los líderes y lideresas sociales que han sido asesinados por estos actores (ver cuadro).

MÁS DE UN ASESINADO POR DÍA

1. ORLANDO NEGRETE. (02/06/2018). TIERRA ALTA. CORDOBA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Camu Las Delicias.

2. CARLOS JIMMY PRADO GALLARDO. (02/06/2018). OLAYA HERRERA. NARIÑO. Directivo ASOCOETNAR, Representante legal de Satinga Joven y Delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense, CONAFRO y Marcha Patriótica.

3. JULIO CESAR MONTALVO (02/06/2018). MONTELIBANO. CORDOBA. Hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán, del cabildo la Meta Territorial del resguardo Zenú alto San Jorge.

4. FRADI CHICA (02/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. excombatiente FARC

5. YEISON RAMIREZ (11/06/2018). VALLE DEL GUAMUEZ. PUTUMAYO. Presidente Junta de Acción Comunal vereda la Yet.

6. FRANCISCO JOSÉ GUERRA GUERRA (12/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Líder comunitario en calidad de presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Mandarino.

7. HOLMAN MAMIAN (12/06/2018). LA VEGA. CAUCA. Docente la Institución Educativa Santa Rita sede el Ventiadero del municipio de la Vega- Cauca. Afiliado a ASOINCA.

8. ARNULFO CATIMAY BLANCO. (19/06/2018) SANTA ROSALIA. VICHADA. Pueblo Saliva en Vichada.

9. CRISTIAN ANDREY RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (20/06/2018). HACARI. NORTE DE SANTANDER. Líder comunal.

10. LUIS CARLOS CABRERA SEGURA (20/06/2018) FLORENCIA. CAQUETA. Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Berlín.

11. EVELIA FRANCISCA ATENCIA PEREZ (21/06/2018) MAICAO. GUAJIRA. Docente sindicalista integrante de la Colombia Humana.

12. HECTOR SANTIAGO ANTELIZ (23/06/2018). TEORAMA. NORTE DE SANTANDER. Actualmente el líder hacía parte de ASCAMCAT, como responsable de coordinar el Comité Veredal en San José. También se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal.

13. JANER ALBERTO CORREA ARBOLEDA (23/06/2018). TEORAMA. NORTE DE SANTANDER.

14. ADRIAN PEREZ. (23/06/2018). CURVARADO. CHOCO. Hijo de reclamante de tierras.

15. ISAAC NAVARRO MORA (23/06/2018). TEORAMA. NORTE DE SANTANDER.

16. ANDERSON ORTIZ (23/06/2018)

17. JOSE ABRAHAM GARCIA (25/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Presidente JAC Pascuita.

18. JAMER ALBEIRO IDROBO NAVIA (26/06/2018). EL BORDO. CAUCA. Integrante del comité Cocalero Vereda La Joaquina y COCCAM.

19. JULIO CESAR SUCERQUIA (27/06/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Miembro fundacional de La asociación de Comité de Barequeros del Norte de Antioquia. MINERO.

20. LUIS ERARDO FERNÁNDEZ VELASCO (28/06/2018). Caloto. CAUCA.

21. IVAN DE JESUS LAZARO MAZO (29/06/2018). PUERTO LIBERTADOR. CORDOBA. Integrante de ACSUCOR y Marcha Patriótica, Ex secretario JAC Vereda Rogero.

22. LEONEDIS ALEISER SIERRA ORTIZ (02/07/2018). TARAZA. ANTIOQUIA. Miembro la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo, corregimiento de El Guáimaro, de Tarazá.

23. GABRIEL ADOLFO CORREA CHAVESTAN (02/07/2018). BUENOS AIRES. CAUCA Concejal por el Partido Verde, trabajo en la Colombia Humana.

24. DAVID MEJIA PRIETO (02/07/2018). LA MONTAÑITA. CAQUETA. Ex presidente Junta de Acción Comunal de Provivienda en el asentamiento Virgen del Carmen.

25. SANTA FELICINDA SANTAMARIA (03/07/2018). QUIBDO. CHOCO. Presidenta JAC del Barrio Virgen del Carmen.

26. LUIS BARRIOS MACHADO (03/07/2018). PALMAR DE VARELA. ATLANTICO. Presidente ASOCOMUNAL Palmar de Varela.

27. MARGARITA ESTUPIÑAN USCATEGUI. (04/07/2018). TUMACO. NARIÑO. Presidenta JAC Barrio el recreo vereda Vaquerio Llorente.

28. ANA MARIA CORTEZ MENA (04/07/2018). CACERES. ANTIOQUIA. Coordinadora Municipal de la Colombia Humana.

29. ANCIZAR CIFUENTES (04/07/2018). CHAPARRAL. TOLIMA. Beneficiario restitución de tierras.

30. FRANCISCO DOBIGAMA (04/07/2018). ORITO. PUTUMAYO. Comunero Cabildo Indígena Caña Bravita

31. DARÍO DOBIGAMA (04/07/2018). ORITO. PUTUMAYO. Comunero Cabildo Indígena Caña Bravita

32. JOSÉ FERNANDO JARAMILLO OQUENDO (05/07/2018). ITUANGO. ANTIOQUIA. Junta de Acción Comunal de la vereda Pascuitá

33. FERNANDO GÓMEZ (06/07/2018). GUACARÍ. VALLE DEL CAUCA. Asociación Mixta Indígena y Campesina en Guacarí (Asomic)

Pero la muerte no es la única herramienta de la necropolítica. Como señalaba el pasado 29 de junio el representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, señalaba que:

“Reducir el problema de los ataques a la contabilización de homicidios de ciertas personas no solo afecta la manera como se entiende el problema sino que condiciona la concepción de las soluciones que se ofrecen; por ejemplo, centrando la atención sobre la protección física de personas y no sobre la generación de garantías más robustas que permitan el ejercicio de libertades en los distintos rincones del país. Los ataques, además de anular a una persona o un grupo de ellas, buscan dominar voluntades y ejercer el control social sobre sectores de la población. También constriñen libertades y desincentivan la reivindicación de derechos en el espacio público. La gente termina no ejerciendo la defensa de sus derechos por miedo, de forma que la censura termina interiorizándose”.

Brunori describe con precisión la “mordaza simbólica” instalada en Colombia y cuya “repetición impune transmite y disemina la coerción y el miedo, dos ingredientes esenciales de la censura y la autocensura”. “La defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio. La situación es tan grave que, en Colombia, el riesgo y el miedo son elementos normales e interiorizados en la defensa de los derechos humanos. El impacto social de la cadena de ataques es complejo: todos tienen derechos, pero los derechos están asediados”, concluye el funcionario internacional.

Lo que no señala Brunori es que no hay casualidades en los objetivos que elige la necropolítica. El método elige a miembros de las Juntas de Acción Comunal, líderes y lideresas de la restitución de tierras, de los colectivos cocaleros, o defensores del ambiente, entre otros, porque sabe que esas son las trincheras de resistencia del pueblo colombiano, ante el megaproyecto de despojo permanente sobre el que han edificado su riqueza las élites locales pero,

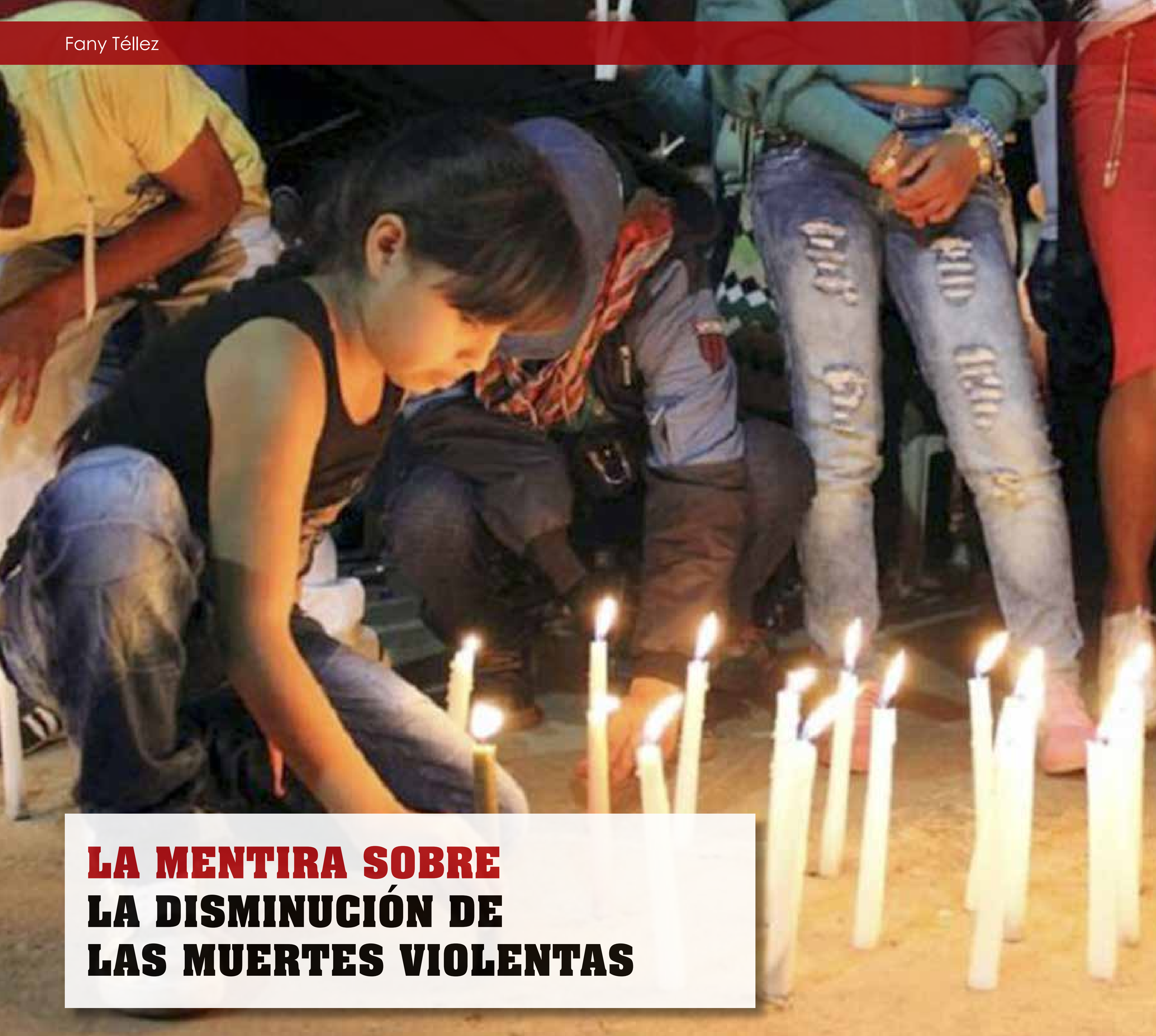


también, las grandes compañías transnacionales.

Por ejemplo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) denuncia que en los seis primeros meses del año han sido asesinados 36 líderes que habían apostado a la sustitución de cultivos. En la misma línea, el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz; Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, cifra en 98 los líderes y lideresas que habían sido asesinados hasta finales de junio. A las muertes, habría que sumar todas las acciones que denuncia Brunori pero que son muy difíciles de cuantificar. La organización Somos Defensores señaló que en 2017, por ejemplo, se registraron, al menos, 370 amenazas, 50 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible. En 2018, ese tipo de hechos se han multiplicado.

La pregunta, con este somero repaso por la realidad, es si el Estado puede permitirse sacar la violencia de la política, cuando su política se basa en la violencia….

Fany Téllez



LA MENTIRA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE LAS MUERTES VIOLENTAS

No hay casualidades en la relación que el Gobierno hace entre la dejación de armas de las FARC y el fin de la violencia. Aunque sea falsa. El pasado 27 de junio se cumplía un año desde que las FARC entregaran el grueso de su armamento y Juan Manuel Santos se sumaba al hashtag #UnAñoSinArmas para presumir en redes: "Tuvimos las elecciones más pacíficas de la historia; Dejaron de llegar heridos de guerra al Hospital Militar; Los turistas van a destinos que antes el conflicto no dejaba; Tuvimos la tasa de homicidios más baja en 40 años". No mentía, pero utilizaba una técnica muchos más eficiente: invisibilizar los datos molestos, aquellos que contradicen el mito construido durante años, que dice que el problema de la violencia en Colombia es un asunto achacable casi en exclusiva a las guerrillas. No puede haber relato triunfante si no se pueden demostrar resultados espectaculares, aunque para ello haya que falsear la realidad hasta límites insoportables.



Lo cierto es que, históricamente, las muertes violentas relacionadas con el conflicto armado y político llevan años fluctuando entre el 10 y el 15 por ciento del total. De hecho, un año y siete meses después de firmado el acuerdo de paz los datos del Instituto de Medicina Legal ratifican que el número de muertes violentas en realidad no descienden en el país, que los homicidios, tampoco, y que la violencia política está disparada.

Las cifras indican que entre 2015 y 2017 la disminución de la cifra de homicidios es casi imperceptible, pasando de 11.585 a 11.373. Lo más grave es que entre enero y mayo de 2018, los últimos datos oficiales disponibles, hablan de 4.644 homicidios, un 4,5 por ciento más que en el mismo periodo de 2017. El Gobierno reporta cero muertes entre guerrilleros de las FARC porque, oficialmente, ya no hay tales, pero no cuenta que la propia Fiscalía reconoce el asesinato de, al menos, 70 ex combatientes de las FARC e identifica como principal victimario al Clan del Golfo, la mayor estructura narcoparamilitar de ultraderecha del país, que ha aprovechado la salida de las FARC de los territorios para expandirse con el permiso necesario de las Fuerzas Militares.

La violencia ha sido la forma recurrente de administrar este país por las élites colombianas, que además del asesinato directo generan unas condiciones de pobreza, desigualdad y falta de acceso a la educación, que están detrás de muchas de las violencias cotidianas que enfrentan las colombianas y los colombianos.

En 2017, se disparó la violencia sexual en un 11,2 por ciento con 33.798 casos reportados, aunque Medicina Legal constata que este es un altísimo subregistro. Igual pasa con la 'epidemia' de suicidios. Sólo en los 5 primeros meses de 2018 ya se supera en un 10 por ciento la cifra del mismo periodo de 2017, con 980 suicidios, pero es que 2017 fue el año con más suicidios desde que hay datos en el país: 7 personas se quitaron la vida cada día, que totalizan 2.571 casos.

¿Qué celebra Santos? No lo sabemos muy bien, pero tiene que ver con la alteración de la realidad, que opera la hegemonía en el país gracias a su aparato mediático y al silenciamiento de las voces críticas.

Eso sí, cada vez les cuesta más disimular ante la opinión la persecución política de líderes y lideresas sociales, así como de defensores de los derechos humanos y del ambiente. En lo que va de 2018 ya se superan los 100 asesinatos y la Defensoría del Pueblo ha denunciado que entre 2016 y 2017 fueron ultimados 282. Las agresiones y amenazas se cuentan por miles y no hay datos uniformes. Sólo en las dos últimas semanas han sido asesinados 11 lideresas y líderes campesinos comunales, cocaleros o de la restitución de tierras; dos de ellos mientras Colombia jugaba su último partido en el Mundial de Fútbol de Rusia. El ruido mediático es amigo de la violencia.



Mara Giraldo

FÚTBOL, CONFLICTO E INDIFERENCIA

En Colombia cuando se trata de fútbol y más cuando juega la selección, afloran todas las emociones nacionalistas, quedan en un segundo plano cualquier diferencia religiosa, étnica y hasta ideológica, la hinchada patriota se une a disfrutar la fiesta, porque lo más importante es que la selección sume puntos en cada partido para avanzar lo que más se pueda en el Mundial.

Es comprensible que en un deporte tan apasionante como este se muevan tantas emociones juntas, pero es preocupante que mientras la gran mayoría se reúnen para concentrase en este acontecimiento, en Colombia se agudizan las problemáticas sociales y no se ve una hinchada unida para enfrentarlas.

Este compromiso que se tiene con el fútbol no es el mismo que se tiene para enfrentar la desigualdad en el país; el alto conocimiento técnico y táctico que se tiene del fútbol no es el mismo que se desarrolla para comprender la realidad y las problemáticas colombianas; esa preocupación por anotar goles no es la misma cuando cada



día siguen en aumento los asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de la oposición política.

Los invisibilizados

El martes 3 de julio, mientras el país se concentraba y sufría viendo el partido, entre Colombia e Inglaterra, donde se disputaba el cupo para los cuartos de final en el Mundial de Rusia,



asesinaron a Luis Barrios Machado, presidente de Asocomunal y de la Veeduría de Control Ciudadano de Palmar de Varela en Atlántico, quien había denunciado amenazas en su contra; y Santa Felicinda Santamaría, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Virgen Del Carmen en Quibdó, Chocó.

En la madrugada de ese mismo día en el departamento del Cauca, donde nació el defensa goleador de la selección Colombia, Yerry Mina; la comunidad de la vereda El Sinaí del municipio de Argelia, denunció





que dos camionetas habían arrojado los cuerpos de 7 personas con impactos de bala y con signos de tortura.

En lo que va del año han asesinado a más de 100 líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y miembros de oposición política, 19 asesinatos en estas dos últimas semanas.

Los visibilizados a medias

El fútbol no convierte a nadie en insensible, pero es evidente que en Colombia no sólo ha servido como cortina de humo para mantener la impunidad, también esconde las realidades de muchos de los jugadores que conforman la selección colombiana; jóvenes que hacen parte de las miles de víctimas del país, que han sufrido la exclusión social, la pobreza, el desplazamiento y la muerte de sus familiares a manos de paramilitares. Estos son algunos casos:

Juan Guillermo Cuadrado: nació en el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Presenció a los cuatro años de edad la muerte de su padre por los





paramilitares; su madre Marcela Bello, lo sacó adelante trabajando en las bananeras de Apartadó y estudiando en la escuela nocturna.

Juan Fernando Quintero: nació en Medellín, Antioquia. En marzo de 1995 su padre Jaime Quintero, salió de su casa y jamás lo volvieron a ver. Según investigación de la familia su padre fue desaparecido por el Ejército estatal mientras prestaba el servicio militar, en 2001 la demanda que interpusieron al Estado fue negada, actualmente el caso está archivado por falta de pruebas.

Miguel Borja: nació en Tierralta, Córdoba. Se negó a ser reclutado por los paramilitares de la región, que le ofrecieron dinero a cambio de que se enganchara con estas bandas.

Davinson Sánchez: nació en Caloto, Cauca. Víctima del conflicto armado y el desplazamiento de los paramilitares en el norte del Cauca.

Yerry Mina: Nació en Guachené, Cauca. Su familia y la comunidad de su región fueron víctimas de desplazamiento por el bloque Calima de los narco paramilitares de las AUC.

Blanca Espinoza

MÉXICO CAMBIÓ DE ÉPOCA

Volver la mirada a México en estos momentos nos llena de esperanza a todos, México es uno de los países más importantes en la región pues en el confluyen no solo una amplia diversidad cultural, geográfica y étnica sino también condensa todas las desigualdades, injusticias y violencias, que las burguesías nacionales han perpetrado contra los sectores más empobrecidos de Nuestra América.

La designación de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como presidente de México significa para Estados Unidos, el Pentágono y la CIA un hueso duro de roer, pues su campaña tuvo como bandera el respeto a la soberanía nacional, la atención prioritaria a los sectores excluidos (mujeres, jóvenes, ancianos, personas en discapacidad), la revisión de los contratos petroleros y de obras públicas, entre otros.

La presencia de AMLO en el gobierno debería implicar un cambio real en las políticas públicas en favor de los sectores populares, que hasta el momento han sido excluidos por las clases do-



minantes, lo que supondrá detener el "festín económico" al que han sometido a México un grupo reducido de archimillonarios, encabezados por Slim.

Los cambios que se requieren para equilibrar la balanza social son sustanciales y será necesario que AMLO pueda sostenerse en el apoyo y la movilización popular, pues es claro que estos grupos oligárquicos no van a ceder sus privilegios sin dar pelea y menos teniendo como aliado a los Estados Unidos. La costumbre hasta ahora había sido que pequeños grupos de las elites concentraran en sus manos directamente o en la de sus aliados todos los poderes.

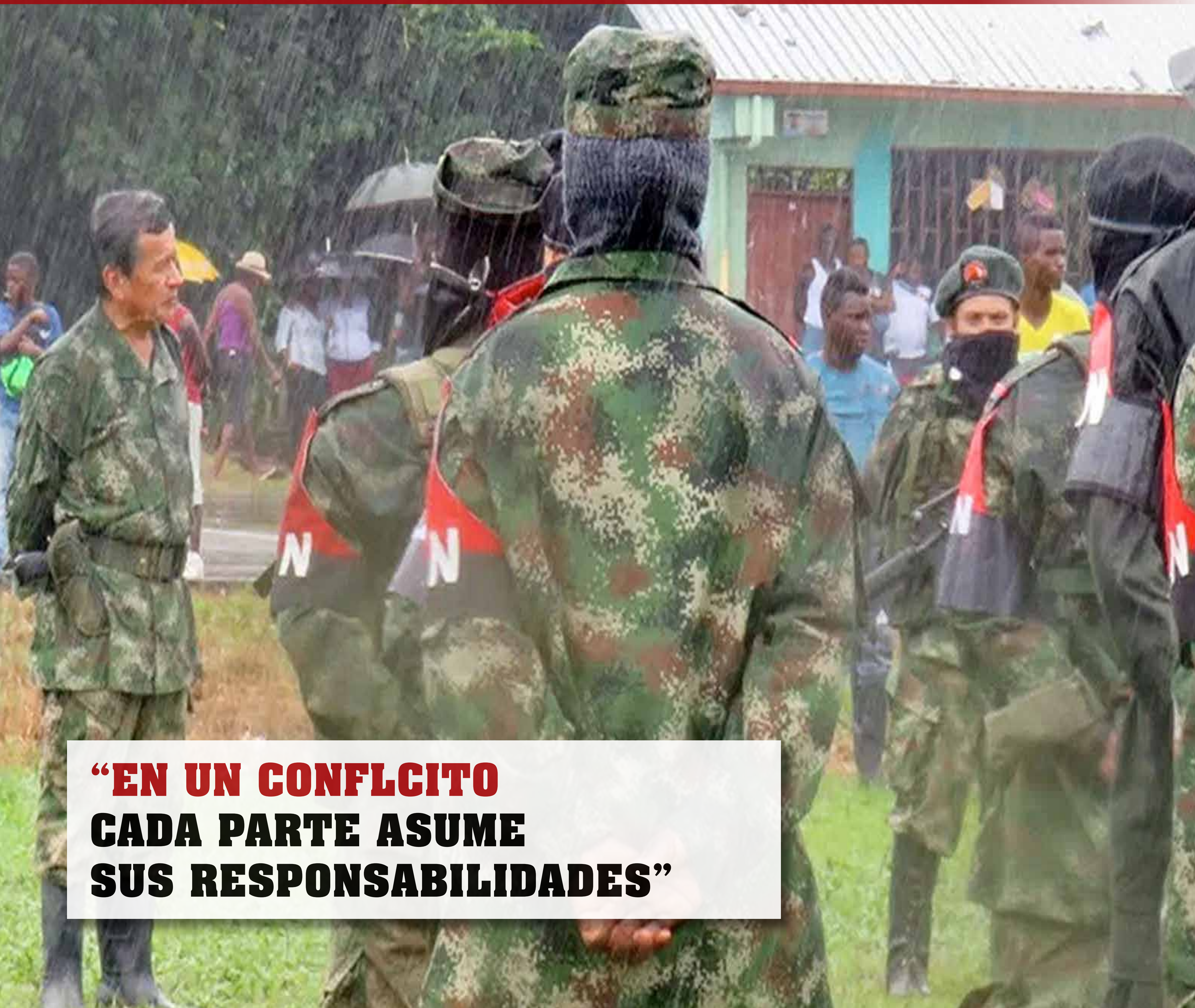
La llegada de esta ola de izquierda configura una nueva época para México y para

Latinoamérica. Impulsan la figura de Andrés Manuel López Obrador la movilización y participación de organizaciones sociales, de obreros, mujeres, ambientalistas, campesinos, estudiantes, quienes cansados hasta el hartazgo de que día a día los desaparezcan poco a poco.

Estas elecciones permitieron a la coalición de partidos políticos en "Juntos haremos historia" alcanzar la mayoría de bancadas en el legislativo y lograr la Presidencia de México, lo que le permitirá de alguna manera a AMLO impulsar la aprobación de leyes y demás decretos que le posibiliten el cumplimiento de las promesas de campaña.

No hay que olvidar que la derecha mexicana ha perdido una batalla, pero aún son fuertes tienen en sus manos el poder judicial y el poder económico, este hecho supondrá volteretas que será necesario menguar con la contención del apoyo popular.

Este resultado en México nos reafirma que por más despojo, masacre y asesinato que hayan sufrido los sectores empobrecidos, jamás lograron arrebatarle la esperanza y la unidad, que aunque adormecida, esta renace y voltea lo establecido y lo construido bajo los pilares de un consumismo y un neoliberalismo burdo. Con esto se reafirma que la fuerza real radica y radicará siempre en el pueblo.



“EN UN CONFLCITO CADA PARTE ASUME SUS RESPONSABILIDADES”

El pasado lunes 2 de julio, el periodista Juan Carlos López, corresponsal en jefe de CNN en Español en Washington, entrevistó en vivo durante una hora en el Programa “Cara a Cara”, a Pablo Beltrán, el jefe de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional. Fueron 37 preguntas en una intensa entrevista con muchas aristas. Destacamos algunos temas de los abordados.

Juan Carlos López. ¿Tienen con quién negociar?, ¿pueden lograr algo de aquí al 6 de agosto que pueda sostener el próximo gobierno?

Pablo Beltrán. Sí… esa es la expectativa que tenemos junto con el gobierno saliente: dejar la mesa en un estado de consolidación para que el nuevo gobierno tenga una cierta presión para darle continuidad a los acuerdos.

J.C.L. ¿Cómo superar la polarización que existe en Colombia? ¿Cómo hacer para que ahora crean que sí es viable un proceso de paz con el ELN?

PB. Dudas hay muchas en Colombia, pero también hay certezas,

por ejemplo, más de 8 millones de personas votaron en una especie de segundo plebiscito por la paz diciendo: "Queremos la continuidad del proceso de paz. Queremos una política de Paz de Estado y queremos que esta política de paz traiga cambios para Colombia". Eso es histórico y es muy importante y para nosotros, en esta mesa, es un gran respaldo que la gente diga y pida que haya continuidad de los procesos de paz.

J.C.L. Cuando hay diálogo, cuando hay negociación, cuando hay conversación… hay para dar y hay para recibir. ¿Qué tiene el ELN para dar y que espera recibir?

PB. Hay una gran cosa que es ésta: para que en Colombia pasemos medio siglo de guerra, esa página que ha sido tan cruenta, todos tenemos que cambiar… tiene que cambiar el régimen y tiene que cambiar la guerrilla. Si cambia uno solo… no va a haber paz. (…) A nosotros se nos ha dicho ¿ustedes quieren dejar de ser guerrilleros? Pues para eso buscamos la solución política del conflicto, pero ¿el régimen a que está dispuesto a cambiar…? y lo que hemos percibido es que a muy poco o a nada, no quiere cambiar.

J.C.L. ¿De qué se arrepiente Pablo Beltrán?, ¿considera que el ELN tiene que ofrecerle disculpas a Colombia, que tiene que ofrecerles disculpas a los colombianos?

PB. Cuando hay un alzamiento armado es porque hay unas condiciones que lo genera. Si en un proceso de paz no se cambian esas condiciones que generan el alzamiento armado… esta generación de guerrillas podemos desaparecer, pero surgirán otras. Entonces, en el caso nuestro, decimos: nos alzamos en armas y estamos en la disposición de sacar la violencia a la política, esperamos que el contradictor piense lo mismo y haga lo mismo. Así va a llegar el fin del conflicto armado.



J.C.L. ¿Por qué necesitan de un proceso de negociación? ¿No podrían desarmarse e ingresar a la vida civil?

PB. Una negociación es que cada uno cede… ¿Usted se imagina? 54 años nosotros diciendo que hay que cambiar a Colombia, pues lo mínimo es decirle al Gobierno: "bueno, vamos a pactar unas transformaciones, cedan también, cedan privilegios". ¿Qué puede hacer la guerrilla? dejar de ser guerrilla, ser una organización sólo política. Los esfuerzos tienen que ser de todos… no sólo de una parte.

J.C.L. Pablo, tuve la oportunidad el viernes de entrevistar a Iván Duque, presidente electo de visita en Washington… ¿qué



tiene usted que responder a Duque?

PB. Primero, me parece bien que diga que quiere revisar dónde va el proceso, ó sea: enterarse. Precisamente aquí, en La Habana, estamos haciendo un esfuerzo por pactar un segundo momento el cese bilateral; pues si hay un cese, queda más fácil desarrollar las conversaciones. Entonces, ahí está la respuesta para lo que él pide, pero un cese quiere decir que el Gobierno también adquiere compromisos.

J.C.L. ¿Estarían dispuestos a hacer eso e irse a una zona de concentración, en medio de la negociación, deponer las armas?

PB. Ahora no es viable. Por lo siguiente: Colombia hoy tiene múltiples violencias, nadie le está asegurando la vida a las FARC. El ELN pactó un cese, donde dice así: "seguirá en los territorios donde ha estado y se hace cese de operaciones ofensivas". Eso nos funcionó en el cese pasado, puede funcionar para un cese siguiente. Eso que dice Duque es algo del final del proceso y este proceso lleva un año apenas de fase pública.

Si él quisiera decir algo del final del proceso para el ELN, nosotros también pudiésemos decir: bueno, el final del proceso para nosotros es que los cambios que queremos para Colombia los haga Duque en el primer año. Eso es del final del proceso. Hay cosas del principio del proceso y cosas del final del proceso.

J.C.L. Sabemos lo que ocurrió en el 64, cuando surgen las FARC y el ELN… hoy, ¿no se han superado esas situaciones?

PB. Ayer salió un índice de los 10 países más desiguales del mundo. De los 10, 8 están en Latinoamérica y 2 en África. La gente cree que es al revés… Y de los 8 que están en América, Colombia es el tercer país más desigual… ¡un país tan rico con tanta desigualdad! La desigualdad que existe hoy es peor que la de hace 54 años. Eso es lo que se pide en Colombia que haya cambios y que haya "un gobierno -como dijo López Obrador ayer-, del pueblo con el pueblo y para el pueblo".

J.C.L. Entre las actividades en las que ha participado el ELN, Usted me dirá si es cierto o no… el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el boleteo, una serie de actividades que generan miedo.

PB. Comencemos por el más complejo. ¿Por qué se siembra coca en Colombia? Porque en Estados Unidos y en Europa la consumen. ¿Por qué no hay otra manera de tratar eso sino con guerra? Hay otra manera. (…) ¿Qué hace el ELN? el ELN no es un cártel, por supuesto. En las partes donde nosotros estamos, que son zonas campesinas apartadas, cuando entran comerciantes a comprar la base de coca, se les cobra



un impuesto a ellos, a los campesinos no. Eso es lo que hace el ELN y por lo que responde. En las zonas nuestras usted no puede encontrar un laboratorio, una pista o que haya mandos nuestros que tengan una red de distribución o de exportación. Eso está prohibido y penalizado en el ELN.

J.C.L. Habla Usted de un conflicto con Venezuela, ¿ve la posibilidad de que Colombia participe en algún tipo de actividad armada contra Venezuela?

PB. Pues a nosotros nos llama la atención que Duque, recién elegido, ya esté involucrado en planes para derrocar el gobierno de Venezuela. Debiera dedicarse más en pensar en arreglar los problemas de Colombia.

J.C.L. Algunos consideran, lo decía Duque, que lo que ocurre en Venezuela es en parte consecuencia por la falta de atención del resto de la región...

PB. Eso es como considerar que los venezolanos son menores de edad y los otros mayores de edad, con derecho a decirles qué deben hacer. No. Que resuelvan ellos sus problemas. ¿Qué país no tiene sus problemas?, ¿qué hay que buscar? Que hablen, que busquen soluciones pacíficas, y que los demás respaldemos lo que la mayoría quiera.

J.C.L. ¿Qué le dice Usted a quienes nos están viendo ahora y dudan que de esta Mesa pueda salir algo positivo?

P. Lo primero: hemos dicho en la Mesa que en este proceso de paz se necesita "verdad toda, verdad todos". Es el primer nivel de satisfacción a las víctimas. Un segundo nivel es que haya asunción de responsabilidades, porque en un conflicto cada parte debe asumir sus responsabilidades. O sea, se hacen cosas en el sentido correcto que se deben hacer, pero también hay cosas que no se hacen bien, entonces si no hay esa distinción para asumir esas responsabilidades… qué le espera a la paz, a las víctimas… porque se dice que el corazón del proceso de paz son las víctimas; en este sentido es que hay que trabajar.



ELIMINADOS

más de 130 líderes este año